

AUTO N. 08014

“POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 modificada por las Resoluciones 046 del 13 de enero de 2022 y 00689 del 03 de mayo de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente, y

CONSIDERANDO

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante **Auto No. 00624 del 25 de marzo de 2019**, en contra del señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **LA CABAÑA V.I.P**, registrado con matrícula mercantil No. 2812263 del 04 de mayo de 2017, ubicado en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, así:

*“ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, en calidad de propietario del establecimiento **LA CABAÑA V.I.P**, registrado con matrícula mercantil No. 02812263 del 04 de mayo de 2017, ubicado en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por cuanto traspasó el límite máximo permisible de emisión de ruido en **10.5 dB(A)**, dado que, la medición efectuada presentó un valor de emisión de **70.5 dB(A)**, en un **Sector C. Ruido Intermedio Restringido**, donde lo permitido es 60 decibeles en horario nocturno, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo”*

Que el **Auto No. 00624 del 25 de marzo de 2019**, fue notificado de manera personal día 15 de abril de 2019 al señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299 y publicado en el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente el 3 de octubre de 2019.

Que mediante radicado SDA No. 2019EE140694 del 25 de junio de 2019, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, comunicó el **Auto No. 00624 del 25 de marzo de 2019**, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales y Agrarios de Bogotá D.C., de conformidad con el artículo 56 la Ley 1333 de 2009.

Que de forma posterior a través del **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, la Dirección de Control Ambiental, procedió a formular el siguiente pliego de cargos en contra del señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **LA CABAÑA V.I.P**, registrado con matrícula mercantil No. 2812263 del 04 de mayo de 2017, ubicado en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad:

***“ARTÍCULO PRIMERO:** Formular el siguiente pliego de cargos a título de dolo, en contra del señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **LA CABAÑA V.I.P**, registrado con matrícula mercantil No. 2812263 del 04 de mayo de 2017, ubicado en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, así:*

Cargo Primero: Por sobrepasar en horario nocturno el límite máximo permisible de emisión del ruido en **10,5 dB(A)**, mediante el empleo de un (1) mezclador (marca GEMINI, referencia PS 121 X, serial no reporta), un (1) amplificador (marca YAMAHA, referencia RX - 397, serial reporta), una (1) fuente electroacústicas (marca no reporta, referencia no reporta, serial no reporta), una (1) fuente electroacústica (marca SONY, referencia no reporta, serial no reporta), un (1) computador (marca SAMSUNG, referencial no reporta, no reporta), dado que se presentó un nivel de emisión de **70,5 dB(A)** en un **Sector C. Ruido Intermedio Restringido**, siendo lo permitido **60 decibeles**, generando ruido que traspasó los límites de la propiedad ubicada en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad, vulnerando con ello el artículo 2.2.5.1.5.4. del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con la tabla No. 1° del artículo 9° de la Resolución 627 de 2006.

Cargo Segundo: Por no implementar los sistemas de control necesarios, para garantizar en horario nocturno que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas en desarrollo de las actividades de expendio de bebidas alcohólicas en las cuales utiliza de un (1) mezclador (marca GEMINI, referencia PS 121 X, serial no reporta), un (1) amplificador (marca YAMAHA, referencia RX - 397, serial reporta), una (1) fuente electroacústicas (marca no reporta, referencia no reporta, serial no reporta), una (1) fuente electroacústica (marca SONY, referencia no reporta, serial no reporta), un (1) computador (marca SAMSUNG, referencial no reporta, no reporta), y desarrolladas en el predio de la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad clasificado dentro de un **Sector C. Ruido Intermedio Restringido**, vulnerando de esta manera el artículo 2.2.5.1.5.10 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con la tabla No. 1° del artículo 9° de la Resolución 627 de 2006.

Que el **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, fue notificado por edicto el cual permaneció fijado por el término de cinco (5) días calendario desde el 23 al 27 de noviembre de 2020, al señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, previo

envió de citación para notificación personal mediante radicado 2020EE86753 del 24 de mayo de 2020.

I. DESCARGOS

Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de los mismos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Que en el párrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009, se establece: “Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo solicite”.

Que, para garantizar el derecho de defensa, el señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, contaba con un término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, para presentar escrito de descargos en contra del **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, por el cual se formuló pliego de cargos.

Así las cosas y una vez verificada la fecha de notificación del **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, se evidencia que el término para allegar el escrito corre a partir del día 30 de noviembre de 2020, siendo la fecha límite el día 14 de diciembre del mismo año.

Que, para el caso que nos ocupa, y una vez consultado el sistema forest de la Entidad, así como el expediente sancionatorio **SDA-08-2019-224**, se evidencia que el señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, estando dentro del términos legales establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, no presentó escrito de descargos en contra del **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, por el cual se formuló pliego de cargos no presente descargos, siendo esta la oportunidad procesal con que contaba para aportar y/o solicitar la práctica de pruebas que estimara conducentes, pertinentes y útiles.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Que, durante la etapa probatoria, se pretende obtener los elementos necesarios que proporcionen la efectiva consecución de la certeza respecto de los hechos objeto de debate.

Que previo a la decisión que deba tomarse, es preciso consultar los principios y criterios que rigen el procedimiento en materia de pruebas, tales como los de la conducencia, la pertinencia, la utilidad y el fin de la prueba en torno al tema de prueba procesal y fundamentalmente frente al tema de la investigación de que trata este procedimiento sancionatorio ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, al respecto de los criterios de valoración mencionados anteriormente, el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta), en decisión del diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), Rad. 18093, Consejero Ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, se pronunció de la siguiente manera:

"(...) El artículo 168 del C.C.A. señala que, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 178 del C. de P.C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas". De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. (...)"

Que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado¹, la prueba debe ser entendida:

"(...) En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella sino un medio del que nos servimos para establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o incompleto; por su parte para Ricci "la prueba no es un fin por sí mismo, sino un medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes de emplear un medio para conseguir el fin que se persigue es de rigor convencerse de la idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se busca" y por último Framarino anota en su "Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es el medio objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu.

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la prueba debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir el juez al momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor de convicción de un medio o conjunto de medios probatorios. El artículo 168 del C.C.A. prevé que en los procesos que se surtan ante esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con las normas del C.C.A. marginalmente (...)"

Que, con base a la anterior definición, es necesario señalar lo que el Código General del Proceso determina en cuanto a las pruebas:

¹ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A" CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01(0864-07).

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Art. 164 del C.G.P.)
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Art. 165 del C.G.P)
3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Art. 167 del C. G P.).
4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Art. 168 del C. G P.)

Que, de acuerdo a lo anteriormente expresado, tenemos que las pruebas son un medio de verificación de las afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con el fin de otorgarle al juez las pautas necesarias para tomar una decisión.

Que, aunado a lo anterior, se tiene que no sólo se necesita allegar oportunamente las pruebas que se pretende hacer valer dentro del proceso, sino que estas deben ser congruentes con el objeto del mismo, igualmente éstas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.

Que el tratadista Nattan Nisimblat en su libro “Derecho Probatorio - Principios y Medios de Prueba en Particular Actualizado con la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1437 De 2011”, en las páginas 131 y 132, al respecto de los requisitos intrínsecos de la prueba, definió lo siguiente:

*“(...) 2.3.1.1. **Conducencia.** La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico (elementos ad substantiam actus y ad probationem) (...)”*

***2.3.1.2. Pertinencia.** Inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non relevant. La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el “tema probatorio”. Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate (...)”*

***2.3.1.3. Utilidad.** En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.”*

Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de los mismos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

*“(…) **ARTÍCULO 25. DESCARGOS.** Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.”*

Que en el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009, se establece: *“Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo solicite”*.

Que, desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el proceso Sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

2. Del caso en concreto

Que, de conformidad con la normatividad, doctrina y la jurisprudencia señalada de manera precedente, el tema de la prueba se refiere a los hechos que se deben investigar en cada proceso, y que para el caso que nos ocupa corresponden a aquellos que llevaron a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente a formular un pliego de cargos, a través del **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, al señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, lo cual se hace necesario probar o desvirtuar mediante las pruebas que de forma legal se aporten o practiquen dentro del presente procedimiento administrativo.

Que para el caso que nos ocupa, el señor a formular un pliego de cargos, a través del **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, al señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, no presentó escrito de descargos.

Que de otra parte y como quiera que esta Entidad dentro de esta etapa probatoria podrá ordenar de oficio las que estime necesarias, conforme al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, se considera que, por guardar directa relación con los cargos imputados, resulta provechosa la incorporación de las siguientes pruebas:

- Concepto técnico No. 14816 del 21 de noviembre de 2018 (rad 2018IE271690).
- Acta de visita de fecha 3 de noviembre de 2018

En relación con los medios probatorios documentales referentes al **Concepto técnico No. 14816 del 21 de noviembre de 2018 (rad 2018IE271690)** y el **Acta de visita de fecha 3 de noviembre de 2018** que se decretan de oficio y que se incorporan a la presente investigación, esta autoridad considera que resultan pertinentes en tanto que guardan relación directa con los hechos, habida

cuenta que con los mismos se pueden evidenciar las condiciones de modo tiempo y lugar de la ocurrencia de aquellos.

Son a la vez conducentes por cuanto guardan debida aptitud o idoneidad legal para acreditar o desvirtuar los cargos formulados, teniendo en cuenta que por estos medios probatorios se encuentra consignada la información referente a la visita del 3 de noviembre de 2018, en las cuales se verificó el incumplimiento ambiental en materia de ruido.

Finalmente son útiles y necesarias, en la medida que estas pueden demostrar el fundamento fáctico contenido en el pliego de cargos formulado mediante **Auto No. 01656 del 24 de mayo de 2020**, situación que no está demostrada con otras pruebas.

Que en consecuencia, se tendrán como prueba el **Concepto técnico No. 14816 del 21 de noviembre de 2018 (rad 2018IE271690)** y el **Acta de visita de fecha 3 de noviembre de 2018**, por ser los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles para el presente caso, a fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de una presunta infracción ambiental, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente auto y como se dispondrá en la parte dispositiva de este acto administrativo.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Consejo de Bogotá, *“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”*, ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el artículo 5 del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que, de conformidad con lo contemplado en el numeral 2° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 modificada por las Resoluciones 046 del 2022 y 00689 del 2023, se delegó

en el Director de Control Ambiental, entre otras, la función de expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Entidad mediante del **Auto No. 00624 del 25 de marzo de 2019**, en contra del señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **LA CABAÑA V.I.P**, registrado con matrícula mercantil No. 2812263 del 04 de mayo de 2017, ubicado en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de esta Ciudad, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

ARTÍCULO SEGUNDO. - De oficio, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, incorporar y practicar como pruebas dentro del proceso sancionatorio de carácter ambiental – con expediente **SDA-08-2019-224**, las siguientes por ser pertinentes, conducentes y necesarias, para el esclarecimiento de los hechos:

- **Concepto técnico No. 14816 del 21 de noviembre de 2018 (rad 2018IE271690)**
- **Acta de visita de fecha 3 de noviembre de 2018.**

ARTICULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor **UBIESNED GONZALEZ ALZATE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.137.299, en la calle 18 sur No. 16 A - 65 local 2 de la localidad de Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá D.C, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO. - El expediente **SDA-08-2019-224** estará a disposición de la parte interesada en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de noviembre del año 2023



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

MANUEL FERNANDO GOMEZ LANDINEZ CPS: CONTRATO 20230888 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 12/05/2023

MANUEL FERNANDO GOMEZ LANDINEZ CPS: CONTRATO 20230888 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 11/05/2023

Revisó:

MARIA XIMENA DIAZ ORDÓÑEZ CPS: CONTRATO 20230405 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 22/05/2023

Aprobó:

Firmó:

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 23/11/2023

Expediente: SDA-08-2019-224